

**BOLETIN****OFICIAL****PROVINCIA DE CÓRDOBA.**

Las leyes y las disposiciones del Gobierno son obligatorias para la capital de provincia desde que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la misma provincia. (Ley de 3 de Noviembre de 1837.)

**GOBIERNO DE LA PROVINCIA.****Presidencia del Consejo de Ministros.**

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real familia continúan sin novedad en su importante salud.

**Supremo Tribunal de Justicia.**

En la villa y corte de Madrid, a 28 de Febrero de 1859, en los autos pendientes ante Nos por recurso de casación interpuesto por D. Antonio Aura contra la sentencia de la Sala tercera de la Real Audiencia de esta corte, confirmatoria con las costas del incidente en ambas instancias, de la del Juzgado del Barquillo, inhibiéndose de conocer del concurso voluntario de dicho Aura:

Resultando que este que segun certificación del Inspector de vigilancia de la primera sección del distrito del Congreso, se hallaba empadronado como del comercio, habiendo desde 3 de Mayo de 1857 el cuarto principal del núm. 12, en la plazuela del Angel, expuso ante el Juzgado del Barquillo, en 10 de Octubre del mismo año, que separado de una casa de comercio que llevaba con su hermano en Pamplona, se había dedicado al de paños, pidiendo varias casas nacionales y extranjeras géneros que vendió en distintos puntos, fijándose últimamente

**SUSCRICIÓN PARTICULAR.**

Un mes en Córdoba.	42 rs.	Fuera de ella.	16 rs
Tres id.	33 rs		40 rs
Seis id.	66 rs		90 rs
Un año.	132 rs		180 rs

*Sepublica los Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados.*

Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los Boletines oficiales, se han de remitir al Gefe político respectivo, por cuyo conducto se pasarán á los editores de los mencionados periódicos. (Reales órdenes de 6 de Abril de 1839, y 31 de Octubre de 1845.)

en Madrid en Octubre de 1856; pero que desgraciadamente se veía reducido á dimitir sus bienes á favor de sus acreedores, entre los cuales sólo la casa de Bartheche, de París, había incaido autos en el juzgado de la Universidad, por lo cual acompañaba relaciones de sus créditos activos y pasivos con la memoria correspondiente, y pedía que se le admitiera la dimisión.

Resultando que en la relación de su haber activo aparecen varias partidas de alfombras, tafciopelo y paños, y en la de las deudas, que la mayor parte de estas proceden de paños ó géneros recibidos, siendo la tercera por 62,273 rs. de géneros de Bartheche, Badoux, Chesno y compañía, de París.

Resultando que en un otros de su escrito dijo que pensaba presentar una proposición de espera y quita, y solicitó que, con arreglo al art. 507 de la ley de Enjuiciamiento civil, se convocase a junta de acreedores.

Resultando que estimada la convocatoria y hechas las citaciones y anuncios oportunos, expresándose en todos que Aura era del comercio de esta corte, acudió al Tribunal de Comercio la indicada sociedad de París, y después de expresar la deuda de Aura, por pedidos de géneros, para cuyo pago se habían girado letras, cubierta una y protestadas las demás, y que el dimitente era del comercio cuya Tribunal debía entender en el concurso, pidió que se oficiase de inhibición al juzgado del Barquillo.

Resultando que estimada la solicitud si bien Aura sostuvo la competencia del juzgado ordinario, porque no bastaba el haberse dedicado á actos mercantiles para tenerse por comerciante no estando en la matrícula de los de su clase, y porque que la misma sociedad de París había acudido al juzgado ordinario de la Universidad para el embargo preventivo por el protesto de sus leales

tras se inhibió el juzgado del Barquillo, de conformidad con su Prohibitor fiscal, mandando remitir al Tribunal de Comercio las actuaciones.

Resultando que pedida por Aura reforma de dicha providencia, apelando subsidiariamente, y admitida la apelación, se siguió la segunda instancia en dicha Sala tercera, opinando el Fiscal del S. M. que debía confirmarse la providencia apelada, y así se hizo por la sentencia de 23 de Junio del año próximo pasado referido al principio.

Resultando, finalmente, que contra esta sentencia interpuso Aura el recurso de casación hoy pendiente, fundandole en que era contraria á los artículos 17 y 1,014 del Código de Comercio, y al 503 de la ley de Enjuiciamiento civil, y en que lo era también á la doctrina emitida por este Tribunal Supremo en la sentencia de 25 de Enero de 1858, dictada en un recurso como el actual.

Vistos, siendo P.ante el Ministro D. Juan María Biedot.

Considerando que D. Antonio Aura está dedicado exclusivamente al comercio desde época anterior al año 1851.

Considerando que como tal comerciante se ha dado á conocer en la capital y provincias del reino, y en todos los puntos del extranjero donde ha extendido su tráfico mercantil.

Considerando que al fijar su último domicilio en esta corte, se empadronó como comerciante, calificándose de tal en los anuncios y citaciones oficiales á sus acreedores.

Considerando que todas las deudas comprendidas en el estado que acompañó á ese escrito de dimisión debieron proceder de operaciones rigurosamente mercantiles.

Considerando que la reunión de las circunstancias referidas en el art. 117 del Código de Comercio basta para suponer el ejercicio habi-

tual de la profesión de comerciante, no se excluye la prueba en otra forma de ese mismo ejercicio habitual, como sucede en este caso, llenando el objeto del referido artículo.

Considerando que aunque D. Antonio Aura no tuviese la cualidad de comerciante para los efectos del art. 1,014, pertenecen sus actos á la clase de mercantiles, según el art. 359, debiendo quedar sujetas las controversias que sobre ellos ocurran á las leyes y jurisdicción de Comercio por lo dispuesto en los artículos 32 y 1,200 del citado Código.

Considerando que el art. 505 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede entenderse con privación de la jurisdicción, que lo es privativa de los Tribunales de Comercio para las contestaciones judiciales sobre obligaciones y derechos propios de las negociaciones mercantiles, según el art. 1,149 del referido Código.

Considerando, por último, que la sentencia de este Tribunal Supremo de 25 de Enero de 1858 se fundó justamente en condiciones opuestas á las de D. Antonio Aura, puesto que ni la personalidad de D. Pedro Casas ni sus actos tenían el carácter mercantil necesario para la competencia del Tribunal de Comercio.

Fallamos, que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Antonio Aura, á quien condenamos en las costas y á la pérdida de 2,000 rs. del depósito, los que se distribuirán con arreglo al art. 1,063 de dicha ley de Enjuiciamiento civil, devolviéndose á costa del mismo recurrente los autos á la expresa Real Audiencia.

Así por la presente sentencia, que se publicará en la Gaceta de esta corte e insertara en la Colección legislativa, pasando al efecto las correspondientes copias certificadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. — Ramón María Fonseca. — Ramón María de Arnala. — Joa-

qui de Roncali.—Jorge Gisbert.—Juan María Biec.—Felipe de Urbina.—Eduardo Elio.

Publicación.—Leída y publicada fué la precedente sentencia por el Ilmo. Sr. D. Juan María Biec, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda hoy día de su fecha, de que certificó como Secretario y Escribano de Cámara de S. M.

Madrid 28 de Febrero de 1859.  
—Dionisio Antonio de Puga.

En la villa y corte de Madrid, a 1.º de Marzo de 1859, en los autos de competencia entre el juzgado de la Capitanía general de Granada y el de primera instancia de Guadix, acerca del conocimiento de la causa instruida contra D. Francisco Javier Torres López, a instancia de D. José Navarro Murillo, por allanamiento de morada y estupro á su hija Doña Rosa Navarro:

Resultando que en 15 de Julio de 1857 D. José Navarro acudió al juzgado de primera instancia de Guadix deduciendo la querella criminal de que se ha hecho mérito, en cuya virtud se procedió á instruir sobre el caso la correspondiente sumaria:

Resultando que en 15 de Septiembre del mismo año D. Javier Torres López pidió ante el juzgado de la Capitanía general de Granada que se oficiase de inhibición al de primera instancia, fundándose para ello en el fuero militar que le correspondía como Subteniente honorario de ejército, conforme al Real despacho que se le expidió en 13 de Noviembre de 1841, por el cual, atendiendo á que D. Francisco Torres, individuo que fué de la Milicia nacional de Guadix en la anterior época constitucional, había justificado haberse hecho acreedor á la gracia otorgada por las Cortes del reino en el art. 6º del decreto de 12 de Setiembre de 1823, restablecido en 14 de Marzo de 1837, se dignaba S. M. conceder el uso del respectivo uniforme de la Milicia nacional con el distintivo y carácter de Subteniente del ejército, mandando, por tanto, se le guardasen e hiciesen guardar las horas, gracias, preminencias y exenciones que por el expresado carácter de Subteniente del ejército le tocaban y debían ser guardadas.

Resultando que librado oficio en su virtud al juzgado ordinario de primera instancia, la parte querellante se opuso á la inhibición manifestando, á este fin, que el Real despacho que presentaba D. Francisco Javier Torres debió de ser expedido á favor de otro sujeto, pues según resultaba de la partida de bautismo del procedido, este nació en 1.º de Febrero de 1815 y fué hijo de D. Juan Antonio Sanchez Torres y de Doña Ramona López, no conviniendo por lo mismo los nombres, y aparentando además que en la época de 1823 se hallaba en la edad de ocho años.

Resultando que el juzgado ordinario se negó á la inhibición, fun-

dándose, ademas de lo expuesto por el querellante, en que por Real orden de 14 de Julio de 1839 se resolvió que el distintivo de Subteniente concedido por el expresado decreto de 1823 es meramente honorífico y no abraza la concesión de las preminencias y exenciones ajenas á dicho empleo, y en que para disfrutar el fuero militar debe estarse á lo prevenido en el art. 28 del reglamento de retiros de 3 de Junio de 1828:

Resultando que en vista de lo expuesto por la jurisdicción ordinaria, dispuso el juzgado de Guerra que se averiguara si en Guadix existía ó había existido otro sujeto llamado D. Francisco Javier Torres, y como el Alcalde de dicha ciudad contestase negativamente, insistió dicho juzgado en la competencia, manifestando que no era del caso investigar los motivos por los cuales se hubiese expedido el Real despacho, sino acatar sus disposiciones, habiendo sido exhibido por aquél á quien se concediera y á quien correspondía, por tanto, el goce de sus preminencias mientras no se reclamase por otro en juicio competente y en este fuera vencido el que lo poseía; indicando, ademas, que la calidad de Subteniente de ejército que concurreda en el D. Francisco Javier Torres la tenía reconocida el mismo juzgado de Guadix, en otro expediente criminal que se agitaba á instancia de Lorenzo García, vecino de Gádora.

Vistos; siendo Ponente el Ministro de este Supremo Tribunal D. Joaquín de Roncali:

Considerando que no aparece debidamente justificado en estas actuaciones que D. Francisco Javier Torres sea el individuo de la Milicia nacional de Guadix á cuyo favor se expidió el Real despacho de 13 de Noviembre de 1841, en que funda su competencia el juzgado de la Capitanía general de Granada:

Considerando que aun en el supuesto de ser una misma la persona acusada y la que mereció la Real gracia de que se ha hecho mérito, solo puede corresponderle por virtud del decreto de las Cortes de 12 de Setiembre de 1823, restablecido por otro de 14 de Marzo de 1837, el uso de uniforme de la Milicia nacional con el distintivo de Subteniente del ejército, siendo de igual naturaleza esta concesión á la cruz otorgada también por las referidas disposiciones:

Considerando que una y otra distinción son puramente honoríficas y solo dan derecho á las consideraciones y preminencias ajenas á las mismas:

Considerando que por el reglamento de 3 de Junio de 1828 y la ley de 28 de Agosto de 1841 se fijan y determinan los años de servicios necesarios para que los militares, al retirarse del servicio, puedan obtener el uso de uniforme y fuero criminal:

Considerando, finalmente, que, según la jurisprudencia creada por este Supremo Tribunal, los simples honores de una categoría sin una concesión especial no dan derecho al fuero sino solo á las consideraciones, tratamiento y uso de uniforme ó distintivo propio de la misma, no correspondiendo tampoco el fuero criminal á los militares á quienes por gracia especial se concediese

un grado del ejército, si esta gracia no comprende específicamente la del fuero, consiguiente á lo establecido en las disposiciones antes citadas sobre retiros:

Fallamos, que el conocimiento de esta causa corresponde al juzgado de primera instancia de Guadix, al que se remitan unas y otras actuaciones para lo que proceda con arreglo á derecho.

Así por la presente sentencia, que se publicará en la Gaceta de esta corte e insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto las correspondientes copias certificadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramon María de Arriola.—Joaquín de Roncali.—Juan María Biec.—Felipe de Urbina.—Eduardo Elio.

Publicación.—Leída y publicada fué la precedente sentencia por el Ilmo. Sr. D. Juan María Biec, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda hoy día de su fecha, de que certificó como Secretario y Escribano de Cámara de S. M.

Madrid 2 de Marzo de 1859.  
—Dionisio Antonio de Puga.

Resultando que la jurisdicción militar sostiene corresponderle el conocimiento, en cuanto al mencionado soldado, apoyándose en que no resulta justificado el delito de atentado contra la Autoridad del Alcalde pedáneo:

Resultando finalmente, que el Juzgado civil ordinario expone que el desacato y resistencia á la justicia caían desafuero, según la ley 9º, título 10, lib. 12 de la Novísima Recopilación y Real orden de 8 de Abril de 1831, y que compete á la jurisdicción ordinaria instruir el procedimiento correspondiente, sin perjuicio de que si el desacato y resistencia no hubiesen tenido lugar y si delito de otra clase de los que no producen desafuero, se ponga al alcance de disposición de su Autoridad respectiva:

Vistos; siendo Ponente el Ministro D. Felipe de Urbina.

Considerando que la cuestión que debe resolverse consiste en si el hecho de que se trata produce desafuero, atendida la clase de Autoridad desacatada:

Considerando que los Alcaldes pedáneos, que antiguamente tenían atribuciones judiciales, son hoy agentes delegados de los Alcaldes constitucionales, conforme á lo prescrito en el artículo 89 de la ley vigente de Ayuntamiento:

Considerando que el Código penal en su artículo 189, parroso se segundo, establece el principio de que el atentado se comete lo mismo contra una autoridad que contra su agente, de lo que se deduce que Francisco Sordo, desacatando y resistiendo al Alcalde pedáneo, desacató y resistió al Alcalde constitucional de quien aquel era delegado y representante en virtud de disposición expresa de la ley:

Considerando que los Alcaldes constitucionales por ejercer funciones judiciales tienen el carácter de justicia, y en tal concepto la resistencia y desacato á los mismos producen desafuero conforme á lo establecido por las leyes 8º y 9º, título 10, libro 12 de la Novísima Recopilación y por la Real orden de 8 de Abril de 1831:

Fallamos, que el conocimiento de esta causa, en cuanto al soldado Francisco Sordo, corresponde al Juzgado de primera instancia de Betanzos, al que se remitan unas y otras actuaciones para lo que proceda con arreglo á derecho.

Ai por la presente sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramon María Fonseca.—Ramon María de Arriola.—Juan María Biec.—Felipe de Urbina.—Eduardo Elio.—José María de Trillo.

Publicación.—Leída y publicada fué la precedente sentencia por el Ilmo. Sr. D. Felipe de Urbina, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en la Sala Segunda del mismo hoy día de la fecha, de que certificó como Secretario y Escribano de Cámara de S. M.

Madrid 3 de Diciembre de 1859.  
—Dionisio Antonio de Puga.

## 2.º Quincena de Marzo de 1859.

ESTADO que manifiesta el precio medio que han tenido en dicha quincena los frutos y artículos de primera necesidad que á continuación se expresan, en peso y medida de Castilla.

PUEBLOS.	GRANOS.					CALDOS.			CARNES.			
	Fanega. Trigo.	Fanega. Cebada.	Fanega. Centeno.	Fanega. Maíz.	Arroba. Garbanzo.	Arroba. Arroz	Arroba. Aceite.	Arroba. Vino.	Arroba. Aguard.	Libra. Vaca.	Libra. Carnero.	Tocino. Libra.
Córdoba.	55,89	33,14	»	28	26	47	32	60	4,85	4	6,50	
Adamuz.	62	36	»	21	34	26	70	3,30	3,30	9		
Aguilar.	50	28	»	20	38	48	64					
Alcaracejos.	50											
Almedinilla.												
Almodóvar.												
Áñora.	46	32	38	16	32	42	21	54		2,50	5	
Baena.	55	33	»	17	34	16	52	4,48	3,30	8,50		
Belalcázar.	50	28	»	18	25	36	14	46		1,54	3,50	
Belméz.	50	34	»	18	34	42	16	62				
Benamejí.												
Blazquez.	50	30	36	15	34	40	14	56		1,50	7	
Bujalance.	58	35	»	24	26	34	40	80		2	4,50	
Cabra.	62	34	42	20	22	36	14	50	2		4	
Cañete.	58	38	»	16	34	48	72			3,06	6	
Carcabuey.												
Carlota.	56	38	»	25	28	34	45	70	1,88	1,88	5,50	
Carpio.	60	38	»	25	34	40	36	72	1,52	1,52	5	
Castro.	56	36	40	18	23	34	20	62		1,65	4,25	
Conquisto.												
Doña Mencia.	58	32	36	16	35	16	58			3,90	7	
Dos Torres.	52	32	40	18	28	40	19	94			3,50	
Eucinas Reales.												
Espejo.	53	36	42	21	24	34	22	44		3,30	8	
Espí.	56	30	»	20	»	46	10				8	
Fernan Nuñez.	53	38	»	23	24	34	26	60		3,77	4	
Fuente-ovejuna.												
Fuente la Lancha.												
Fuente Palmera.	60	28	»	30	»	34	»					
Fuente Tojar.												
Grajuela.												
Guadalcázar.												
Guijo.												
Hinojosa.	51	31	38	21	24	42	12	50				
Hornachuelos.												
Lucena.	58	36	40	30	25	36	10	48	4,77	3,53	9	
Luque.												
Montalvan.	60	30	»	23	36	32	72		3,03	3,03	8	
Montemayor.												
Montilla.												
Montoro.	62	39	»	24	24	35	38	63	2,48	1,75	4,50	
Monturque.	60	32	»	22	34	24						
Morente.												
Nuevas Cartella.												
Ovejero.												
Palenciana.	60	32	»	13	36	40	40				9	
Palma.	54	34	38	20	28	36	38	56	3,90	3,50	8	
Pedro Abad.												
Pedrach.	44	19	22	15	36	38	17	60			8	
Posadas.												
Pozoblanco.	54	36	36	23	30	40	30	84				
Priego.	56	30	»	18	36	16	36	36		4	3,29	
Puente Genil.	55	33	»	22	33	36	20	53	3,30	3,30	9	
Rambla.												
Rute.												
San Sebastián.												
Santa Ella.	54	36	»	25	36	34	48	68			4	
Santa Eufemia.	55	32	45	23	33	44	16	65		4	3	
Torrecampo.												
Valenzuela.	60	36	»	16	30	44	18	60		1,66	7	
Valsequillo.	50	30	35	16	30	34	»					
Victoria.	53	30	»	22	30	34	»					
Villa del Río.	60	35	»	25	20	36	30	58				
Villafanca.	54	34	»	20	30	34	46	86	1,42	1,42	4	
Villaharta.												
Villaviciosa.												
Villaralto.												
Villanueva del Rey.	50	30	»	17	40	15	48			2,72	4	
Villanueva del Duque.	46	28	34	17	40	42	18	44				
Villanueva de Córdoba												
Viso.	48	26	30	46	30	40	16	70		1,50	2,50	
Iznajar.	57	34	»	23	26	37	28	60			8	
Zúberos.	58	28	»	21	22	32	20	50			6	
Zambra.	56	31	47	18	22	36	9	50	2,36		6	
Precio medio.	55,28	32,35	36,01	40,03	21,05	27,05	39,29	24,03	57,34	3,08	3,04	6,30

# Supremo Tribunal de

Justicia.

-suscitada por el juzgado de la Capitanía general de las Islas Canarias al de primera instancia del Puerto de Arrecife, como Tribunal de Comercio, para que se iniciara el conocimiento de los autos pendientes en él en la vía de apremio, promovidos por D. José de Medina, como sujeto único y universal heredero de su madre Doña Antonia de Castro, y como apoderado de Doña Rosalia de Castro, tía del mismo, herederas ambas de su padre D. Gines, contra los hijos y herederos de D. Bartolomé Arroyo, y contra la fiadora de este Doña Bárbara Cabrera de Armas, para el cobro de 27,324 pesos corrientes, 43 fr. plata y 10 cuartos y un tercio:

Resultando que habiendo fallecido en 1806 D. José de Armas, marido que fué de dicha Doña Bárbara, se procedió por la jurisdicción militar, en razón de haber sido Capitán de Milicias, a la apertura del testamento, al nombramiento de aquella para tutora y curadora de cinco hijos menores de edad que habían quedado del matrimonio de la misma con Armas, y al inventario de los bienes que se entregaron en depósito a la propia viuda:

Resultando que estas diligencias permanecieron en tal estado hasta que en 21 de Julio de 1855 se presentó al referido juzgado de la Capitanía general, y se unió a las mismas, un escrito en que D. Fernando Pereira, por sí, como marido de una de las hijas de Armas, y poniendo voz y caución por otros dos, expuso que, sin embargo de haberse hecho cargo Doña Bárbara de la tutela y de la administración de los bienes de la testamestraria, no se le había pedido cuenta ni practicado formal división de los bienes, por lo que concluyó pidiendo que se hubiese por provocado el juicio de partición, y que se fijase término a dicha Doña Bárbara para que rindiese la correspondiente cuenta:

Resultando que, después de varias actuaciones, recayeron providencias, en 20 de Octubre y 24 de Noviembre de 1856, declarando la obligación a la reedición de cuenta que se pedía, y habiendo por intentado el juicio de partición con otros varios pronunciamientos dirigidos a que esta tuviese efecto; consecuencia de lo cual fue rendida la cuenta y aprobada sin perjuicio en 9 de Setiembre de 1857.

Resultando que antes de esta fecha, en Junio de dicho año 1857, en los autos de apremio expresados antes se habían embargado bienes de Doña Bárbara para el cumplimiento de una sentencia de revista que había causado ejecutoria, dictada por la Audiencia de aquellas islas en 21 de Febrero de 1856 en pleito mercantil seguido por el D. José de Medina por su propio derecho y como apoderado de los herederos del D. Bartolomé Arroyo y contra la misma Doña Bárbara, ascendiendo la cantidad, para cuyo pago se pro-

cedía, a los 27,324 pesos indicados antes:

Resultando que aunque el juzgado del Arrecife había dado cumplimiento en 1855 a un exhorto del de la Capitanía general para la interdicción de bienes de la Doña Bárbara, como no hubiese prestado igual cumplimiento a otro expedido en 1856 para que no permitiera poner mano en ellos, solicitó y consiguió Pereira que se librara oficio inhibitorio a aquel juzgado, para que, alzando el embargo que había provisto contra dichos bienes, los dejase sujetos a la jurisdicción militar mediante al juicio de partición pendiente:

Resultando que recibido el oficio por dicho juzgado del Arrecife y todo Medina, este, después de presentar diferentes documentos y de evacuarse a su instancia varias posiciones, todo ello dirigido a justificar que la partición de bienes de Armas estaba hecha, solicitó que se contestase al juzgado militar diciéndole que dejase expedita la jurisdicción mercantil para el conocimiento de los autos que pendían ante ella, y que en caso contrario tuviese por entablada la competencia:

Resultando que estimada esta solicitud y dirigida la contestación, el juzgado de la Capitanía general insistió en la competencia, exponiendo en apoyo de su jurisdicción que en el radicaba la testamentaria de Armas, cuya partición de bienes no estaba hecha formalmente, y que siendo aquella un juicio universal, atañía a sí todos los demás particulares según la causa cuarta del art. 157 de la ley de Enjuiciamiento civil; que, pendiente ese juicio y la dación de cuentas de la administradora de los bienes, tutora y curadora nombrada también por aquel juzgado militar, si él se hallaban sujetos los bienes de la misma, debiendo acudir por consiguiente al propio juzgado el acreedor particular de esta, así para ventilar cual crédito era preferente, como para intervenir si le conviniese en la liquidación de cuentas de la tutela y en la partición de bienes, de lo que había de resultar si restaban algunos a la administradora y tutora aplicables al pago de créditos contraídos por ella con posterioridad que nada importaba la circunstancia de que en el juzgado donde se trataba del cumplimiento de una ejecutoria en negocio mercantil, porque si bien era incontrovertible la competencia de los Tribunales de Comercio en negocios de su ramo, era cuando procedían contra bienes propios de los ejecutados; pero no así cuando se quería proceder como en el caso actual, contra los que se hallaban pendientes en una testamentaria; que atendido su espíritu, era aplicable al presente negocio lo dispuesto en el art. 380 de dicha ley de Enjuiciamiento civil, y que si continuase procediendo el juzgado del Arrecife, se dividía la contingencia de la causa:

Resultando, finalmente, que por el contrario se expone en favor del juzgado del Arrecife que la promoción del juicio de testamentaria no era más que un ardid de Pereira y demás herederos de Armas con la D. Bárbara para dejar ilusoria la ejecutoria de la Audiencia de aquel ter-

itorio en un negocio mercantil, siendo la única competente para conocer de este, según el art. 352 de la ley de Enjuiciamiento de ese ramo, la jurisdicción del mismo, y debiendo Pereira y consortes, si creían tener un crédito contra los bienes de Doña Bárbara preferente al reclamado por Medina, acudir a dicha jurisdicción a deducir la oportuna tercera con arreglo al art. 380 de la referida ley mercantil; que Medina no debía personarse en el juzgado militar; porque ni él ni la persona que representaba eran interesados en la testamentaria de Armas, ni podían representar a la Doña Bárbara en la partición; y que estaba justificado que ésta se hallaba hecha desde 1820:

Vistos; siendo Ponente el Ministro D. Juan María Bieco:

Considerando que D. José Medina nada ha reclamado de la testamentaria de D. José de Armas:

Considerando que su acción únicamente se dirige contra los herederos de D. Bartolomé Arroyo, y contra Doña Bárbara Cabrera en concepto de fiadora de este:

Considerando que en el caso incierto de existir en el patrimonio de Doña Bárbara bienes suficientes para responder de los descubiertos que resultasen a cargo de ella en el juicio de testamentaria, Pereira y consortes podrían dirigirse en tercera contra el juzgado:

Y considerando que las reclamaciones en tercera son cuestiones incidentales del juicio de apremio:

Fallamos, que debemos declarar y declaramos que el conocimiento de los autos de que se trata corresponde al juzgado de primera instancia del Arrecife; devolviéndose al mismo y al de la expresada Capitanía general sus respectivas actuaciones para lo que proceda con arreglo a derecho.

Así por la presente sentencia, que se publicará en la Gaceta de esta corte é insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto copias certificadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramon María Fonseca.—Ramon María de Arriola.—Juan María Bieco.—Felipe de Utrera.—Eduardo Elio.

Publicación.—Leída y publicada fué la precedente sentencia por el Ilmo. Sr. D. Juan María Bieco, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando Audiencia pública en su Sala segunda hoy día de su fecha, de que certifico como Secretario y Escribano de Cámara de S. M.

Madrid 2 de Marzo de 1859.  
—Dionisio Antonio de Puga.

## JUZGADOS.

### Juzgado de primera instancia de Bujalance.

D. José Talero y Escobar, Juez de primera instancia de esta Ciudad de Bujalance y su partido.

Hago saber: que en el interdicto de adquirir propuesto en este mi Juzgado por D. Juan María de Castro y Lara por consecuencia del fallecimiento de su Sr. padre D. Juan de Castro y Valle que fué de este domicilio, ocurrido el catorce de Marzo último, he proveido auto con fecha de ayer mandando publicar por edictos en los sitios públicos de esta población y Boletín oficial de la provincia, el siguiente

Auto.—Por presentado con las partidas de sepelio y bautismo que sea acompañan; y constando por estos documentos, y por los autos que se tienen á la vista que D. Juan de Castro y Valle era padre de D. Juan María de Castro y Lara y poseedor de los vínculos y agraciaciones de cuya mitad se pide la posesión deseada al D. Juan María de Castro, sin perjuicio de tercero, para lo cual se confiere comisión a Manuel Rodríguez, alguacil de este juzgado, que la evacuará ante el presente Escribano: hágase saber á los inquilinos, colonos, depositarios y administradores de los bienes correspondientes á dicha mitad, que reconozcan al nuevo poseedor, y hecho dése cuenta. Así lo mandó y firmará el Sr. D. José Talero y Escobar Juez de primera instancia de este partido en Bujalance a cinco de Abril de mil ochocientos cincuenta y nueve, de que doy fe.—José Talero.—Francisco Aguado.

El auto inserto está conforme con su original, de que el referendario da fe; y con el objeto de que el que se crea con derecho a reclamar contra la posesión dada lo haga dentro de sesenta días, se hace esta publicación por medio del presente edicto.

Dado en Bujalance á ocho de Abril de mil ochocientos cincuenta y nueve.—José Talero.—Por mandado de dicho Sr. Francisco Aguado.

## ANUNCIOS

### INTERESANTE

Para los efectos de la Real orden de 31 de Diciembre de 1858, en la que se previene á los Ayuntamientos que en un tiempo límitado se numeren todos los edificios de España, se anuncia á las Corporaciones municipales de esta Provincia, que en la casa de los Sres. González Valls, en Valencia, se expenden los ladrillos llamados azuljos dados de barniz blanco suyo, con el número de color azul, al precio de un real de vellón al pie de fabrica, siendo de cuenta del comprador el embalado, porte y demás.

Los Ayuntamientos que deseen adquirirlos podrán dirigirse á «Don Francisco Antón Erquiero, liquidatario de la casa de los señores González Valls, Valencia», quien se encargará de remitir á cada pueblo el número que necesita para su distrito municipal.

### CÓRDOBA: 1859

Imprenta y Litografía de D. F. G. Tena, calle de la Librería num. 4.